República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
Medellín, 25 de agosto de dos mil veinte (2020)

PROCESO	Ejecutivo Singular
DEMANDANTE	MARÍA TERESA RESTREPO
DEMANDADO	MARÍA DOLLY AGUIRRE JIMÉNEZ
RADICADO	Nº 05001 40 03 027-2018-00621-00
INSTANCIA	Única
SENTENCIA Nº	226
DECISIÓN	DECLARA PROBADA PARCIALMENTE EXCEPCIÓN-ORDENA SEGUIR ADELANTE EJECUCIÓN

Siendo la oportunidad para ello, procede el Juzgado a proferir sentencia anticipada conforme lo autorizado por el artículo 278 núm. 2 del C.G. del P., tal y como fue dispuesto en auto de 17 de enero de 2010 (fls. 31) dentro del presente proceso EJECUTIVO SINGULAR, promovido por MARÍA TERESA RESTREPO en contra de MARÍA DOLLY AGUIRRE JIMÉNEZ.

ANTECEDENTES:

MARÍA TERESA RESTREPO, actuando en causa propia, instauró demanda EJECUTIVA SINGULAR en contra de MARÍA DOLLY AGUIRRE JIMÉNEZ, para que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero:

- DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$2.965.000) por concepto del capital insoluto respecto del título valor (letra de cambio) obrante a folio 1, más los intereses moratorios causados desde el 1º de julio de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación.
- DOS MILLONES de PESOS M/L (\$2.000.000) por concepto del capital insoluto respecto del título valor (letra de cambio) obrante a folio 3, más los intereses moratorios causados desde el 1º de julio de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación.

HECHOS

Como supuestos fácticos de la pretensión, refirió los que a continuación se compendian:

Que la señora MARÍA DOLLY AGUIRRE JIMÉNEZ suscribió el 10 de abril de 2017 dos letras de cambio por valor DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$2.965.000) y DOS MILLONES de PESOS M/L (\$2.000.000), para ser canceladas el 30 de junio de 2017. Que no se pactaron intereses de plazo. Que los intereses moratorios se pactaron a la tasa máxima legal permitida. Que a la fecha de presentar la demanda, la accionada no ha cumplido con el pago de la obligación.

ADMISIÓN Y TRÁMITE

En auto del 30 de agosto de 2018 se libró mandamiento de pago a favor de la demandante y en contra de la demandada, de conformidad a lo solicitado en el escrito

de la demanda. Así mismo, se dispuso el embargo y secuestro de un inmueble de propiedad de la demandada en auto de la misma fecha.

La demandada se notificó personalmente del auto que libró mandamiento de pago (FLS.32), concediéndosele el término de 5 días para pagar o 10 días para contestar la demanda (presentar excepciones) el 21 de febrero de 2019 (fls. 17).

Encontrándose dentro del término legal, la demandada por intermedio de apoderada judicial contestó (fls.19 a 26) la demanda presentado como excepción de mérito la que denominó “*pago parcial del capital*”.

Fundamentó la apoderada su medio de defensa afirmando que a la fecha de dicha respuesta, su poderdante a realizado abonos en cuantía de \$3.800.000, aportando como soporte de ello varios recibos y algunas consignaciones. Así mismo, en escrito (fls. 29 y 30) posterior, de 20 de junio, refiere una nueva consignación por valor de \$1.165.000.

De las excepciones se dio traslado a la parte actora (fls. 27), hecho que dio lugar a que recorrieran el traslado igualmente dentro del término de ley (fls. 28), limitándose a informar que de dichos abonos dio cuenta al juzgado y fueron realizados con posterioridad a la presentación de la demanda, aseverando que la consignación por la suma de \$600.000 no fue autorizada y no tiene certeza sobre la misma.

Una vez transcurridos los términos de traslado, se decretaron pruebas y se anunció sentencia escrita, por considerar que se daban los presupuestos para ello (fls.31).

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero indicar que en el presente caso se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso, además de que no se observa causal de nulidad que pueda invalidar total o parcialmente lo actuado, por lo que hay lugar proferir sentencia.

Como es bien sabido, para que una obligación pueda ser cobrada ejecutivamente, conforme al artículo 422 del C.G. del P., ésta debe ser “*clara, expresa, exigible y estar contenida en un documento que provenga del deudor o su causante y que constituya plena prueba en contra de él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley...*”.

Satisfechas por la demandante este conjunto de exigencias de orden legal, es decir, una vez ha sido presentada una demanda con pretensión ejecutiva y acompañada de unos documentos contentivos de una obligación con tales características, el juez del proceso, según lo dispuesto por el artículo 430 del C. G del P., librará mandamiento de apremio en contra del demandado, ordenando que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que el juez considere legal. La razón de lo anterior radica en que todo juicio de ejecución tiene por objeto conminar al deudor hacia el cumplimiento forzado de una prestación, para ello, tiene el acreedor a su disposición la posibilidad de solicitar, inclusive, desde antes de ser puesto en conocimiento del deudor, el auto que libra orden de pago, las medidas cautelares encaminadas a asegurar el cumplimiento de un eventual fallo favorable a sus intereses. Se trata, entonces, de efectivizar coactivamente el derecho aducido por el acreedor.

Con todo, aunque no se discuta que en procedimientos de naturaleza semejante a la del que aquí se adelanta se parte de la existencia de un derecho cierto, no puede

desconocerse que le asiste a los demandados el derecho a reclamar y proponer excepciones, con las cuales, puede desvirtuarse todo lo anteriormente especificado.

Y fue precisamente ello lo que ocurrió en el caso que ocupa la atención del Despacho, en donde la demandada oportunamente acudió y presentó la excepción de **pago parcial del capital**.

PAGO DE LA OBLIGACIÓN

El pago es un medio directo de extinguir, sea de manera total o parcial, obligaciones, traducido en la prestación de lo que se debe, según lo indica el artículo 1626 del Código Civil y que constituye la satisfacción del interés del acreedor.

En ese orden de ideas importa destacar de entrada que una de las formas de extinguir las obligaciones es el pago efectivo de la prestación que se debe, este pago ha de hacerse de acuerdo con el art. 1627 del C. Civil, en conformidad al tenor de la obligación y sin que el acreedor pueda ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.

En cuanto al pago como una forma de extinguir las obligaciones, el doctrinante Fernando Hinestroza, en su libro: Tratado de las Obligaciones, 3ª Edición Universidad Externado de Colombia, pág. 570

“El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 C.C.). Es decir, es la ejecución cabal de la prestación debida. Decimos que paga el que hizo lo que prometió hacer (ULPIANO. D. 50, 16, 176). Y apenas hay para qué advertir [...] que todo pago presupone una deuda, por lo mismo que es el hecho debido, de modo que a falta de aquella se presentaría el fenómeno de pago de lo no debido o de lo indebido.

[...]

“El pago (cumplimiento) es un modo de extinción de las obligaciones con caracteres propios, distintos de los demás: es el modo natural, normal de extinción de ellas, y de ahí también la extensión de su disciplina.

El pago significa conformidad entre lo ocurrido y lo previsto, entre la conducta exigible del deudor y su comportamiento frente al acreedor y, por lo mismo, sus requisitos son ante todo los puntualizados en el título o fuente de la obligación, sin perjuicio de la reglamentación general que del fenómeno hace la ley en toda oportunidad o apenas cuando no se ha dispuesto cosa diferente, según las circunstancias y las reglas del ordenamiento. El acreedor tiene derecho a la prestación plena, precisa y oportuna, y cumplir quiere decir ejecutar exactamente la prestación debida. [...]”

Ahora bien, el pago puede ser parcial o total, si se trata de un pago parcial, la excepción propuesta puede ser personal o real, siendo la primera cuando el pago se registra en el **título pudiendo ser oponible a cualquier tenedor, y la segunda cuando se prueba el pago** en documento separado, como un recibo de caja menor, constancia de consignación, testimonio, etc. Ésta última forma de pago parcial solo puede ser oponible al acreedor pagado o al nuevo tenedor si está de mala fe¹.

El pago de lo indebido - o **cobro de lo indebido** - consiste en la relación o vínculo jurídico que se establece entre la persona que recibe lo que no tenía derecho a recibir y aquella que paga por error, en cuya virtud el cobrador se constituye en la obligación de restituir lo indebidamente pagado.

El “pago de lo no debido” según el artículo 2313 del Código Civil, se configura cuando una

persona que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, y por ello le surge el derecho a repetir por lo pagado. Ese pago de lo no debido incluye aún lo pagado por error de derecho cuando el pago no tenía fundamento en una obligación ni siquiera puramente natural... (...).

Entonces, es claro que, habiéndose hecho un pago de aquello que no se debe, es decir, que no existe una obligación clara, expresa y exigible frente a la persona que recibió el pago, el actor debe probarlo, o sea, no basta con la mera manifestación, debe demostrar que, claramente, lo pagado no tiene asidero, que no existe obligación previa que dé lugar a tal pago. Aún más, probando que no había lugar a pagar lo que no se debe, surge de inmediato el derecho de repetir contra quien recibió el pago, es decir, el derecho a exigir la devolución de lo pagado erróneamente.

Luego, no puede alegar un “pago de lo no debido” quien ha contraído una obligación, clara, expresa y exigible, es decir, que se encuentre actualmente vigente, pues, si aún no se ha extinguido la misma por el hecho del pago, no puede predicarse entonces que se pagó lo que no se debe.

La mala fe "es el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasi delictuoso de su acto, o de los vicios de su título (C-544 de 1994 Corte Constitucional).

La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.

*La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) **ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten** ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario. (Sentencia C-1194/08).*

Las cláusulas aceleratorias de pago otorgan al acreedor el derecho de declarar vencida anticipadamente la totalidad de una obligación periódica. En este caso se extingue el plazo convenido, debido a la mora del deudor, y se hacen exigibles de inmediato los instalamentos pendientes.

Las cláusulas mencionadas se utilizan frecuentemente en operaciones mercantiles como las ventas a plazos y en créditos amortizables por cuotas. Su funcionamiento depende de la condición consistente en el incumplimiento del deudor, así como en la decisión del acreedor de declarar vencido el plazo de la obligación.

3.2. Antes de la expedición del artículo 69 de la Ley 45 de 1990, no existía un límite legal específico respecto del pacto de cláusulas aceleratorias. Este operaba en la costumbre mercantil sin requisitos precisos y su inclusión en contratos por adhesión ocasionaba que la parte que predeterminaba el contenido del negocio jurídico reclamara por regla general la totalidad de la deuda y los intereses respecto del total de lo debido frente a la mora del contratante. En este sentido el cobro anticipado del crédito se hacía sin limitación alguna. Estas cláusulas se consideraban muy onerosas para los deudores porque no existía para ellos una protección específica respecto del plazo y el cobro de las cuotas o instalamentos vencidos, con los correspondientes intereses.

El artículo 1.166 del Código de Comercio reguló expresamente el pacto de cláusulas aceleratorias, sin establecer límite alguno. Pero de las normas civiles ordinarias se podía deducir un límite relativo a la definición del momento en el cual el acreedor ejercía su potestad de declarar el vencimiento anticipado de la obligación. Ese límite era el requerimiento judicial. A la luz de la norma comercial no se podía presuponer que el acreedor haría siempre uso de tal derecho porque el plazo, cuando se había pactado intereses, se entendía establecido en beneficio del acreedor. La razón de ello era que la anticipación del pago lo privaba de mantener colocado su dinero a un rédito acordado (artículos 1554 y 2229 del Código Civil). Por esta razón, la prohibición de restituir el plazo (establecida en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990) es un límite adicional al ejercicio de los derechos que tiene el acreedor. Otro límite se refiere al cobro de intereses, como se verá posteriormente... (Sentencia C-332/01).

CASO CONCRETO

MARÍA TERESA RESTREPO presentó demandada ejecutiva singular en contra de MARÍA DOLLY AGUIRRE JIMENEZ, para que se librara mandamiento de pago por la suma de \$4.965.000 por concepto de capital insoluto contenido en las letras de cambio (fls.1 y 3) que fueron suscritas por la demandada, y por los intereses moratorios adeudados.

Una vez notificado la demandada, contestó a la demanda por intermedio de apoderada judicial alegando el pago **parcial de la obligación**, sustentado en que dentro de las pruebas aportadas al expediente se observa que se produce un pago parcial de los capitales cobrados en los títulos valores adosados a la demanda.

Al alegar el pago parcial significa que reconoce que tiene una obligación con la demandante pero no por el valor ejecutado sino por uno inferior. Y, sin ser precisa sobre los aspectos que soportan lo afirmado, se limita a adjuntar con el escrito de excepciones una serie de recibos, siete (7) en total, y un comprobante de consignación donde se advierten pagos de fechas anteriores a la presentación de la demanda y algunos posteriores, dejando al análisis del despacho los mismos. Alega que dentro del expediente se observa un pago parcial, así de simple, más no es directa y concreta en determinar o señalar el fundamento de lo afirmado si se tiene en cuenta que se trata de dos títulos valores diferentes en cuanto a sus montos, eso sí, iguales en relación con la fecha de creación de estos (10 de abril de 2017) así como de vencimiento (30 de junio de 2017).

Ahora bien, mediante escrito presentado por la demandante el 4 de septiembre de 2018, sin aun haberse notificado la demanda, manifestó que la demandada realizó abonos y pago de intereses con relación a la letra de cambio por valor de \$2.965.000, quedando pendiente el pago de la letra por valor de \$2.000.000, sin que especificara la fecha del pago, ni tampoco solicitara modificación al mandamiento de pago, razón por la cual en auto de 13 de septiembre siguiente se ordenara tener dichos dineros como abono a la obligación conforme el artículo 1653 del Código Civil.

Por tanto, teniendo en cuenta lo acabado de referir, se hará una referencia a los aspectos puntuales y probados dentro del proceso para establecer que ha de tenerse por pago parcial y qué por abono a la obligación.

- Fecha presentación de la demanda: 23 de julio de 2018
- Notificación demanda: 21 de febrero de 2019
- Respuesta a la demanda y excepciones: 6 de marzo de 2019
- Abonos:
 1. \$500.000 el 10/05/17 (fls. 24)
 2. \$300.000 el 03/06/17 (fls. 24)
 3. \$500.000 el 04/08/17 (fls. 24)
 4. \$400.000 el 18/10/17 (fls. 25)

5. \$600.000 el 23/12/17 (fls. 25)
6. \$400.000 el 09/04/18 (fls. 25)
7. \$500.000 el 18/08/18 (fls. 26)
8. \$600.000 el 06/03/19 (fls. 26)
9. \$1.165.000 el 14/06/19 (fls. 30)

Teniendo en cuenta lo anterior, advertimos que para el momento de presentación de la demanda, 23 de julio de 2018, ya se habían generado dos abonos; \$500.000 el 10 de junio y \$300.000 el 03 de julio, ambos de 2017, pagos que no fueron objetados por la parte demandante al momento de correrse el traslado de las excepciones propuestas, razón por la cual el despacho no tendrá camino diferente que declarar probada la excepción de pago parcial propuesta por la parte demandada, pago que habrá de imputarse a la letra de cambio de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$2.965.000), quedando entonces la orden de pago para el momento que este se libró por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$2.265.000) con respecto a este título valor y habrá de mantenerse respecto del otro.

Conforme lo dicho, habrá entonces de ordenar seguir adelante la ejecución, pero por las sumas referidas, pues los demás pagos aportados al proceso habrán de tenerse como abonos imputables en las fechas que ellos se generaron de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 1653 del Código Civil, primero a intereses y luego a capital, lo que se hará al momento de liquidarse el crédito.

Bueno es advertir que si bien la parte demandante objetó el pago por valor de \$600.000, por cuanto refiere que se hizo mediante consignación a una cuenta del Banco ITAU que no estaba autorizada ni tampoco fue informada a la demandante, el despacho no aceptará dicha oposición, pues en momento alguno se hace referencia a que dicha cuenta no pertenezca a ésta; incluso, en consignación posterior (fls. 30), dicho abono fue puesto en conocimiento de la señora María Teresa Restrepo y en momento alguno objeto dicho pago, por lo que su silencio habrá de tenerse como aceptación.

Habrán de condenarse en costas y agencias en derecho a la parte demandada y en su momento se liquidarán por secretaría.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: DECLARAR PROBADA la excepción denominada **pago parcial del capital**, propuesta por la apoderada de la parte demandada, conforme lo arriba explicado.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, se **ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN** a favor de **MARÍA TERESA RESTREPO** y en contra de **MARÍA DOLLY AGUIRRE JIMÉNEZ**, por las siguientes sumas de dinero:

- **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$2.165.000)** por concepto del capital insoluto respecto del título valor (letra de cambio) obrante a folio 1, más los intereses moratorios causados desde el 1º de julio de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación, a la tasa máxima legal permitida siempre y cuando dicha tasa no supere el 1.5 veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- **DOS MILLONES de PESOS M/L (\$2.000.000)** por concepto del capital insoluto respecto del título valor (letra de cambio) obrante a folio 3, más los intereses moratorios causados desde el 1º de julio de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación, a la tasa

máxima legal permitida siempre y cuando dicha tasa no supere el 1.5 veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tercero: Téngase las sumas de: \$500.000 del 04/08/17; \$400.000 del 18/10/17; \$600.000 del 23/12/17; \$400.000 del 09/04/18; \$500.000 del 18/08/18; \$600.000 del 06/03/19 y de \$1.165.000 del 14/06/19, como abonos a la obligación en la forma y términos arriba establecida.

Cuarto: Se ordena el remate, previo avalúo de los bienes embargados y secuestrados y/o los que posteriormente se embarguen y secuestren, para que con su producto se cancele el crédito y las costas.

Quinto: Se condena en costas y agencias en derecho a la parte demandada. Practíquese la liquidación del crédito en la forma establecida en el artículo 446 del C. G. del P., momento en el cual la ejecutante deberá efectuar la imputación de los abonos que hubiere podido recibir de la demandada.

NOTIFÍQUESE

ROBERTO J. AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ

Firmado Por:

ROBERTO JAIRO AYORA HERNANDEZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5bba2237918d9b10a5f4dccd79af102ac8caeb898a5b1a0382a24baa19f839bc

Documento generado en 25/08/2020 09:12:30 p.m.